

# **El Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa 1946: caso Román Cárdenas. Los excesos de una revolución**

José Alberto Olivares

## **Introito**

Cuando se trata de estudiar el desempeño administrativo de algún régimen de gobierno en particular, sobre todo en América Latina, pareciera una constante dar por hecho que entre sus pasivos está presente el fenómeno de la corrupción en todas sus manifestaciones.

Más allá del cálculo político de los gobernantes de turno, quienes inicialmente justifican sus acciones enarbolando la bandera de la moralización en el ejercicio de sus funciones, para luego dejar a un lado este incómodo discurso y reeditar, algunas veces hasta superar con creces, los procedimientos ilícitos de sus predecesores, resulta interesante resaltar la existencia de probadas excepciones a la regla.

En el caso específico de Venezuela, país con un largo historial de peculado e ineficiencia administrativa, el oficio de la política, ha sido visto como una actividad más propia de caudillos audaces y aprovechadores del erario público. La herencia colonial quedó fijada en los modos y costumbres del funcionariado republicano, en donde el poder discrecional en cuanto al manejo inescrupuloso de las rentas y el favoritismo en la asignación de cargos, hicieron fracasar una y otra vez cualquier intento de sana administración.

El destacado ensayista Picón Salas esbozó aquel complejo escenario:

Sociológicamente, Venezuela, después de las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, es como una gran montonera – sin ejército, sin administración pública digna de este nombre – donde el caudillo más guapo [valiente], inteligente o astuto se impone sobre los otros caudillos provinciales. (Picón Salas 2007: 119)

Sin embargo, cabe destacar la existencia de figuras que contribuyeron con su talento a dar un mínimo de coherencia a la gestión de gobierno presidida por los diferentes caudillos. Hombres como Santos Michelena, Diego

Bautista Urbaneja, Simón Planas, Martín J. Sanabria, Jesús Muñoz Tébar, entre otros, si bien ocuparon posiciones subalternas, su efectivo desempeño representaron un claro intento de instituir una sana administración.

En esta oportunidad, traemos a colación el caso de Román Cárdenas, quien sirvió en diferentes cargos, primero en calidad de inspector de la Junta de Fomento del estado Táchira (1887), luego como ministro de Obras Públicas (1910) y ministro de Hacienda (1913). Y aun cuando nunca renegó de haber servido fielmente a una dictadura, su particularísima actuación ha sido reconocida como una notable contribución al proceso de modernización de Venezuela en el siglo xx (Olivar 2009).

La dinámica política trae en ocasiones situaciones inverosímiles que forman parte de procesos de largo aliento. Es justamente, la expectativa de ver consolidado en Venezuela un sistema de gobierno democrático, acompañado de una transformación en la estructura económica y social, que determinó la búsqueda de opciones “eficaces” para acelerar la marcha de los acontecimientos. Uno de ellos, lo representó el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, conocido en la historiografía venezolana como “la revolución de octubre”.

Entre los asertos esgrimidos por sus protagonistas para justificar el movimiento, estaba la imperiosa necesidad de eliminar la práctica del enriquecimiento ilícito y el uso irregular del patrimonio público. Con ese propósito “profiláctico” fue creado un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, que a la postre sería tachado por los opositores al nuevo orden, de franco escenario para el aniquilamiento político de los desplazados del poder. Al respecto Uslar Pietri, una de las figuras más descollantes del régimen depuesto luego del golpe de estado del 18 de octubre de 1945, llegó a señalar:

Esos juicios, que forman parte de los capítulos más tristes de la historia del odio político, constituyen un verdadero monumento de infamia y no pudieron mantenerse con ninguna apariencia de vigencia más allá del tiempo que duró el arbitrario mando de los hombres de octubre [...]. Era, sin duda [...] la grotesca guillotina de aquella falsa revolución. (Uslar Pietri 1992: 31)

Si bien hubo decisiones que de alguna manera resarcieron el daño patrimonial generado tras veintisiete años de dominación hegemónica por parte de una casta familiar ligada al fallecido dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935), no es menos cierto, que hubo notables excesos que dejaron

en entredicho la genuina lucha contra la corrupción ofrecida por los nuevos gobernantes.

Y uno de esos excesos, es lo que explicaremos a continuación.

### **La polémica lista de la revolución**

El 18 de octubre de 1945 ocurre en los principales cuarteles de Caracas un levantamiento militar que puso fin al gobierno del general Isaías Medina Angarita. Su derrocamiento, no sólo significó el desplazamiento del poder de un hombre, sino de una hegemonía regional instaurada desde 1899.

Durante casi medio siglo, cuatro gobernantes venezolanos tuvieron como denominador común dos características ineludibles: militares y andinos. Desde la llegada al poder de Cipriano Castro (1899-1908) al frente de una revolución denominada “liberal restauradora”, la dinámica política venezolana quedó determinada por la sucesión de presidentes que de una u otra forma guardaban vinculación con aquel movimiento armado. Juan Vicente Gómez (1908-1935) ejerció una larga tiranía hasta su muerte sin que ninguna fuerza de oposición colocara en peligro su régimen. “El éxito de Gómez en el control y la centralización del poder del estado por veintisiete años resultó, en gran parte, de su capacidad de asignar el botín entre sus aliados acorde a las necesidades políticas del momento” (Yarrington 2003: 25).

Le siguen en la Jefatura del Estado, los generales Eleazar López Contreras (1935-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945), quienes a su manera, representaron una transición política desde la dictadura hacia una forma de democracia liberal restringida. En definitiva fueron los albaceas políticos de una hegemonía regional que pretendía seguir usufructuando el poder político y militar por varios años más.

El último de los presidentes andinos, el general Medina Angarita, pese a la puesta en práctica de algunas iniciativas como el permitir el funcionamiento de partidos políticos y de sindicatos obreros, así como la libertad de prensa sin mayores cortapisas, fue tímido a la hora de profundizar los cambios, sobre todo en lo relativo al establecimiento del sufragio universal, directo y secreto para la elección del presidente de la República. Además de corregir las viejas prácticas de peculado y favoritismo en la administración pública, como por ejemplo “[...] el empleo de los gastos de la partida

secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para la organización del partido de gobierno” (Caballero 2004: 405).

Transcurridos los cuatro años de su período constitucional, el ambiente político comenzó a crispase debido a lucha de poder desatada entre los partidarios del expresidente López Contreras y el general Medina Angarita, hecho que significó grave fractura en el seno del régimen. Aquella disputa se hizo presente en los cuarteles, pero no en favor de uno u otro, sino en el sentir de una joven oficialidad que estimaba había quedado relegada a servir de simples sostenedores de un liderazgo caduco.

El desenlace no se hizo esperar y así ocurre una alianza militar y civil entre varios oficiales descontentos y los representantes de un pequeño partido político, Acción Democrática, liderado por participantes en la lucha contra la dictadura gomecista que habían pregonado en los últimos años la necesidad de una mayor apertura democratizadora.

De manera que el 18 de octubre de 1945, un golpe de estado dio al traste con el viejo orden y dio inicio a lo que sus protagonistas concertaron en denominar una Revolución. Entre los civiles que integraron la Junta Revolucionaria de Gobierno, estaban Rómulo Betancourt, en calidad de presidente, Raúl Leoni y Valmore Rodríguez, como miembros. Ellos tres, habían suscrito años atrás, el 22 de marzo de 1931, un cuerpo de ideas denominado “Plan de Barranquilla”. En este documento se establecieron las bases de una futura acción de gobierno, el cual quedó contenido en un “Programa mínimo” de inspiración marxista-leninista (Caballero 2004: 103).

Precisaban sus redactores que una de las primeras tareas de la futura revolución consistiría en confiscar los bienes de Gómez, sus familiares y servidores, acompañado de la creación de un Tribunal de Salud Pública para investigar y sancionar los delitos del despotismo (*El Plan de Barranquilla 1931*).

Se pretendía con ello establecer una “nueva ética administrativa” que en opinión de Carrera Damas significaba superar el estado de incompetencia, ineficacia y corrupción que caracterizaba a la administración pública. Rómulo Betancourt había sido unos de sus más severos críticos, sobre todo “durante las dos etapas finales de la dictadura liberal regionalista, representadas por los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita” (Carrera Damas 2013: 341).

De allí que entre los primeros actos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, destacó el establecimiento el 22 de octubre de 1945 de una Comi-

sión Calificadora de Funcionarios Públicos, conformada por Mario García Arocha, Luis Augusto Dubuc y el teniente Martín Márquez Añez.

De inmediato la referida comisión se encargó de determinar quiénes serían las personas presuntamente incurso en delitos contra el patrimonio nacional que no podrían disponer de sus depósitos de valores y bienes inmuebles, hasta tanto un tribunal especial se encargase de dictaminar su responsabilidad civil y administrativa en el manejo de los fondos públicos o enriquecimiento ilícito en beneficio propio o ajeno.

El 10 de noviembre de 1945 apareció publicada en la *Gaceta Oficial* una enorme lista de ciento sesenta y cinco nombres, precisados en estricto orden alfabético, quienes que a partir de ese momento quedaban cuestionados ante la opinión pública y en consecuencia debían a la brevedad posible hacer una declaración jurada de sus bienes, para justificar el origen de estos. De primero en el apartado correspondiente a la letra C, aparecía registrado el doctor Román Cárdenas.

### **¿Quién era Román Cárdenas?**

Román Cárdenas fue un funcionario público que desempeñó a lo largo de más de diez años dos importantes carteras ministeriales bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez, a saber; el Ministerio de Obras Públicas (1909-1912) y el Ministerio de Hacienda (1913-1922). En ese tiempo contribuyó con sus conocimientos a materializar parte del programa político del régimen, consistente en la construcción de carreteras para integrar el territorio nacional y reformar la hacienda pública a los efectos de hacer más eficiente la recaudación de los tributos internos. Estas dos iniciativas, al lado de otras no menos importantes, quedaron como testimonio fehaciente de un ensayo modernizador que pretendía encauzar a Venezuela bajo el signo positivista del *Orden y Progreso*.

Este hombre había nacido en el estado Táchira, situado al occidente de Venezuela, en 1862, contemporáneo de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, a la sazón, los caudillos que llevaron al poder a la facción regional procedente de los Andes venezolanos.

Tras su retiro de la vida pública a partir de 1922, sus reformas administrativas se conservaron incólumes, proporcionándole al régimen gomecista una sólida base de sustentación política y económica que contribuyó a la perpetuación de la dictadura. Con el tiempo, a Román Cárdenas, le fue

atribuida la autoría intelectual del sistema de carreteras construidas en la época y de la transformación de la renta interna de la república. Hasta el punto que los más acérrimos detractores de la dictadura, reconocieron en Cárdenas, una limpia trayectoria pública que descollaba por encima de no pocas figuras cuyas actuaciones como personeros del gomecismo, eran sinónimo de dolo y arbitrariedad (Olivar 2009).

Por ejemplo, uno de los escritores que denunció públicamente los desmanes del gomecismo a través de un voluminoso memorial fue Pocaterra quien trata con un ligero sarcasmo a Cárdenas, refiriéndose a él como el “[...] que inventó la fórmula económica de equilibrar el presupuesto y ahorrar pagando sueldos de los empleados al 50 por 100 en la época más difícil para el mundo” (Pocaterra 1979: 158).

Sus allegados lo describieron como un modelo de compostura, ponderación y caballerosidad que vivió sus últimos años en medio de una ejemplar austeridad. Esta visión de incorruptible funcionario público ha ido acompañada de la marca de eficiente organizador endilgada por historiadores contemporáneos como Quintero (1985: 599), al subrayar que Román Cárdenas, dotó al “ministerio de hacienda de una organización administrativa capaz de planificar sus ejecutorias en función de objetivos claramente definidos”. Señalando además que gracias a ese “esfuerzo organizativo” la estructura de poder del gomecismo se afianzó sin problemas, pues dejó como saldo favorable, la cancelación de la deuda, la construcción de carreteras y la consolidación del ejército.

Incluso, tal y como lo acierta el economista Ochoa, la proyección que adquirieron en el largo plazo “[...] las reformas tributarias, presupuestarias y administrativas de Cárdenas, le permitieron a Venezuela disfrutar cincuenta años de estabilidad económica, estabilidad fiscal, estabilidad en su moneda y una inflación que medida desde 1925 hasta 1975 era de 1,7 % anual” (Ochoa 2008: 179).

En vida, Cárdenas, estuvo al tanto de esta opinión generalmente favorable hacia su desempeño. Por ejemplo, Pepper (1939) lo califica de “creador de las finanzas en Venezuela” (377) por haber aplicado sanos principios administrativos. En medio de un estado de cosas donde el cohecho y los peligros de las intrigas palaciegas eran el denominador común, Pepper, destaca la “plena autonomía en el despacho de hacienda, caso verdaderamente singular en el gobierno del General Gómez” (Pepper 1939: 377).

Otro testimonio es el de Fernández (1956) quien destaca que Cárdenas “trabajó como un titán para crear nuevas entradas y compensar así

el déficit existente” (201). En su opinión, Gómez le había dado ese margen de autonomía porque comprendió que “al final de cuentas todas estas mejoras repercutirían favorablemente en sus propios negocios” (202). En esa misma tónica, Linares de Montemayor (1942) hace hincapié en la inverosímil gestión “revolucionaria” instrumentada en medio de las horcas caudinas de un régimen personalista, subrayando que Cárdenas fue capaz de desechar “[...] viejas prácticas rutinarias de limitar la actuación del despacho [hacienda] a una simple vigilancia y fiscalización de los ingresos y egresos del tesoro público” (16). Sin duda estas descripciones contribuyeron a resaltar la figura del ex ministro tachirenses, en medio de las sombras que embargaron la larga hegemonía andina.

Y en efecto, Cárdenas fue parte de la pléyade de intelectuales venidos del mundo de las Ciencias, las Letras, el Derecho, la Historia y la nascente Sociología que decidieron hacer buena la invitación del general Gómez a integrarse a su gobierno, reconociendo en éste las cualidades necesarias para instaurar de manera definitiva la paz y el trabajo largamente añorado para Venezuela.

Cárdenas coincidía con el resto de la lumbrera que acobijó al régimen, en su rechazo a credos empíricos y al empleo de la violencia como forma de hacer política. Por el contrario, se inscribió en el ideal preconizado desde entonces, de que la correcta aplicación de la ciencia y sus métodos podía garantizar el progreso de la sociedad.

De allí que su gestión administrativa se caracterizó por el estricto cumplimiento de las reglas establecidas y el estudio sistemático de las anomalías existentes en los despachos a su cargo, para precisar las correcciones pertinentes a que hubiese lugar. En ese sentido Segnini afirma:

El gobierno gomecista gracias a la habilidad financiera de Cárdenas, se dedica a solventar los compromisos adquiridos en el exterior procurando ganarse la confianza de los países con los cuales Venezuela había confrontado serios problemas. Ya en el Libro Amarillo del año 1912 se señala que la inmensa deuda del Tesoro venezolano reconocida en los Protocolos de Washington de 1903, la cual montaba a Bs. 38.385.823,94, se había reducido a Bs. 2.190.434,49. (Segnini 1982: 56)

### Una reputación en entredicho

Pese a su hasta entonces inobjetable hoja de servicios, de la noche a la mañana, Cárdenas pasó a ser señalado como “sospechoso” de haber come-

tido “con intención o por negligencia o por imprudencia, actos o hechos, perjudiciales a la cosa pública”.

La noticia fue recibida con asombro y temple en medio de la angustia familiar. Seguro como el que más de su absoluta inocencia nombró como sus apoderados legales a los doctores Vicente Grisanti y Arístides Calvani. Y con fecha 1° de diciembre de 1945 el encausado hizo ante la Comisión Sustanciadora del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa la siguiente declaratoria de patrimonio:

1°- Tres acciones del Banco Caracas	Bs. 69.875,00
2°- Seis cupones del Banco Caracas	15.000,00
3°- Treinta y ocho acciones de la C.A. Nacional de Seguros “La Previsora”	8.400,00
4°- Seis mil noventa y seis acciones de la C.A. La Electricidad de Caracas	469.702,25
5°- Doce acciones del Banco Venezolano de Crédito	67.600,00
6°- Saldo de Bs. 254.944,32 de la Cuenta Corriente en el Banco Caracas	254.944,32
7°- Saldo de la Cuenta Corriente en el Banco Venezolano de Crédito	36.743,95
8°- Casa en el Boulevard “Vallenilla” Parroquia Maiquetía del Departamento Vargas del Distrito Federal	56.000,00
9°- Un automóvil no se le indica valor alguno	
Total	<hr/> Bs. 978.265,52

Varios sectores políticos expresaron su alarma ante los procedimientos empleados para seguir juicio a los presuntos peculadores, mostraron su rechazo a lo que consideraban una “ominosa lista” de perseguidos políticos a quienes se les cobraría con creces facturas pasadas. Caldera, jefe político de COPEI, uno de los partidos opositores al gobierno criticó abiertamente la medida:



Lo que fue una de las posiciones más intachables de la Revolución de Octubre, que era un castigo ejemplar para los que hubiera abusado de los dineros públicos, se ha convertido en una situación incierta y confusa, en la cual están mezclados los inocentes y los culpables, en forma tal, que ya hoy en Venezuela se ha perdido la fe en la justicia al respecto [...]. (Caldera 1989: 220)

En efecto, el decreto de creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, emitido el 27 de noviembre de 1946, establecía que aquel tribunal actuaría de acuerdo con los dictados de su conciencia y estaría formado por “abogados, profesionales y dirigentes obreros, dos miembros de las Fuerzas Armadas y un ilustre sacerdote católico” (Betancourt 1986: 270). Sobre ellos recayó la tarea de juzgar la moralidad administrativa de los inculpados, pudiendo en casos condenatorios ordenar el pase a favor del fisco nacional del total o parcial de los bienes congelados preventivamente.

Entre tanto, los voceros oficiales de la Junta Revolucionaria de Gobierno, anunciaban que parte del dinero restituido a la Nación sería empleado en la construcción de numerosas obras públicas. “Más de 400 millones de bolívares fueron reintegrados al patrimonio de la Nación” (Betancourt 1986: 272). Sin embargo, los críticos de la medida objetaron aquellas aseveraciones señalando lo contrario:

La segunda y más grave de las equivocaciones fue la de los juicios por responsabilidad civil y administrativa. En compensación de los escasos millones que se obtuvieron por malas vías y del precedente de moralización que se quiso dar, se rompieron todas las vinculaciones jurídicas, todos los resortes legales, incluso aquellos que en los juicios de Nuremberg, a criminales de guerra, fueron respetados por extranjeros vencedores contra extranjeros vencidos. No queremos negar que fue un afán noble de sentar precedentes de sanidad moral el que movió a estos procesos; pero, aun admitiéndolo, debemos decir, con toda diaphanidad, con sinceridad, que el balance arroja más daños que beneficios para la nación. (*El Universal* 1947: 416)

Llama la atención lo dispuesto en el artículo dieciocho del referido decreto que establecía desde un principio la “presunción de enriquecimiento ilícito en detrimento de la Nación contra todas las personas sometidas a la Comisión Sustanciadora”, hecho que de por sí era equivalente a culpabilizar en primera instancia a los encausados, lanzando sobre éstos todo signo de sospecha. No hay duda que con ello se buscaba dar una base de legitimidad a las acciones del nuevo gobierno, procurando capitalizar las simpatías de

un importante segmento de la población que asumía como corruptos a los desplazados del poder político.

Sin embargo, la disidencia no tardó en ponerse de manifiesto, y esta se hizo sentir de forma cada vez más creciente dada la forma indiscriminada como fue elaborado el listado en cuestión. Si bien entre los incluidos había nombres hartos conocidos por sus deshonestas actuaciones, en el caso específico de Román Cárdenas, hubo quienes expresaron su desagrado ante aquel “abominable atropello”. Para muestra, valga considerar el testimonio de Herrera Mendoza, entonces presidente del Banco Central de Venezuela:

Ocurrió en un día del año 1946. El doctor Carlos D’ Ascoli era Encargado del Ministerio de Hacienda. Me telefoneó para pedirme que me trasladara a su Despacho porque tenía algo importante que comunicarme [...] Minutos después me hice anunciar y fui introducido a su despacho [...] Yo me situé en uno de los sillones al lado izquierdo del salón y allí esperé, pacientemente [...] levanté los ojos hacia la testera del salón donde se hallaban colocados los retratos de Santos Michelena, Román Cárdenas y Alberto Adriani [...] Tranquilamente aguardé y cuando a D’ Ascoli le dio la real gana de enterarse de mi presencia vino despacio a saludarme. “¿Cómo está señor Herrera?, me dijo. Le respondí: ¿Pues bien, Doctor D’ Ascoli, aquí estoy desde hace largo rato contemplando el retrato del doctor Román Cárdenas que usted conserva sobre su cabeza, sin atreverse a retirarlo de allí. No acierto a comprender por qué razón sigue en ese sitio el retrato del doctor Cárdenas, después de incluido su nombre en la lista infamante de los acusados por peculado. Entiendo que ese retrato fue colocado allí con el fin de que todos los Ministros de Hacienda se inspirasen en la labor patriótica cumplida por tan eximio varón [...] No se compagina, pues, que su esfinge siga iluminando desde ese sitio a la generación actual y a las futuras, y que, simultáneamente, pretendan ustedes deshonrarle. Una cosa o la otra, doctor D’ Ascoli. (Herrera Mendoza 1964: 476)

En otra demostración del rechazo que cundió la polémica lista, incluimos un extracto de la carta abierta dirigida al comandante Julio César Vargas, una de las figuras militares de la revolución de octubre, por el abogado Pinzón:

Así vimos como casi un centenar y medio de venezolanos, y entre ellos aproximadamente cien andinos, de los cuales cerca de noventa eran tachirenses, fueron echados a esa hoguera de la infamia que se llamó la lista de peculado [...] incluyendo Román Cárdenas, cuya obra de acrisolada honradez y loable competencia está a la vista, fue vilipendiado como presunto ladrón nacional. (Pinzón 1989: 435)

En descargo a las acusaciones de ejecución de esta suerte de “justicia revolucionaria” que no admitía distingos ni reparos de ningún tipo, Betancourt expuso su criterio al respecto:

Dos observaciones cabe hacer en torno a esta medida, que ha sido y sigue siendo objeto de viva controversia pública. La primera, que no ignorábamos cómo ese procedimiento de profilaxis administrativa nos concitaría odios inextinguibles y feroces resistencias [...] Pero teníamos adquirido un compromiso público con el pueblo, a través de muchos años de prédica sostenida contra el peculado [...] Y es la segunda, que sólo diferencias de matices, de grado y no de esencia, tienen los procedimientos adoptados por el Gobierno revolucionario de Venezuela con los aplicados, en diversas oportunidades, en otros países hispanoamericanos. (Betancourt 1986: 272)

En medio de las posturas a favor o en contra de las fórmulas empleadas para corregir el viejo mal de la corrupción, el Jurado continuó el trabajo sumarisimo de condenar o absolver a los procesados. No obstante, la intención moralizadora del nuevo gobierno se convirtió en su talón de Aquiles, dado que lejos de recibir el aplauso general desató la inquina de los adversarios, ante el atropello y los excesos. El testimonio de Parra Márquez evidencia el panorama reinante:

Tales sentencias no podrán juzgarse nunca como expresión de la verdadera justicia, por cuanto ellas, además de emerger de un procedimiento cuya legalidad en el sentido prístino de la palabra no podrá nunca admitirse, no vinieron a ser el reflejo de un estado de agitación política propicio a la efervescencia de toda clase de pasiones y violencias. (Parra Márquez 1989: 471)

### **La absolución dispensadora**

Durante buena parte del año 1946, la opinión pública estuvo al tanto de las sentencias del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa publicadas en la *Gaceta Oficial*. Mensualmente, el promedio de casos resueltos estuvo entre ocho y diez sentencias, la mayoría de ellas condenatorias. Los más sonados fueron los juicios seguidos en ausencia a los ex presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, quienes resultaron obligados a reintegrar en conjunto la suma de 27.920.453,3 y cuyos bienes pasaron en su totalidad al fisco nacional. Otros más recibieron el mismo tratamiento, como lo fueron Pedro Manuel Arcaya, Arturo Uslar Pietri, Vicencio Pérez Soto y León Jurado, importantes personeros de los gobier-

nos cuestionados. Pocos recibieron el veredicto absolutorio. Román Cárdenas fue uno de ellos.

En efecto, el 10 de julio de 1946 y después de largos meses de espera, los miembros del Jurado acordaron librar al doctor Román Cárdenas de responsabilidad civil y administrativa y en consecuencia quedaban a salvo los bienes expuestos en su declaración patrimonial.

Para emitir ese veredicto el Jurado integrado por J.F. Méndez, el capitán Francisco A. Gutiérrez, el teniente de fragata Luis J. Ramírez, Antonio Sotillo Arreaza, Luis Hurtado, Eduardo Gallegos Mancera, Héctor Hurtado y A. Hernández, consideró suficientemente justificado el patrimonio declarado por Cárdenas, vistos los recaudos aportados por éste ante la comisión sustanciadora.

Como nota resaltante de esta sentencia, publicada en la *Gaceta Oficial* Extraordinaria N° 185 del 20 de agosto de 1946, el jurado incorporó en sus consideraciones el reconocimiento a “la larga actuación del indiciado en el ejercicio de cargos públicos y los servicios rendidos a la Nación al frente del Ministerio de Hacienda en el cual realizó la reorganización de los ramos fiscales y la modernización de nuestro sistema hacendario” (*Gaceta Oficial*, 20.8.1946: 12).

Superado este amargo momento, Cárdenas decidió junto a su familia marcharse del país para no verse involucrado en el agrio debate político que caracterizó a Venezuela durante el trienio 1945-1948.

Transcurridos los meses y conocida la noticia del derrocamiento del siguiente gobierno presidido por Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, Cárdenas considera en regresar a su patria y vivir en paz sus últimos años.

## Conclusión

Sin duda que la iniciativa de hacer tabla rasa por parte de los nuevos detentadores del poder político a partir del golpe del 18 de octubre de 1945, concitó una serie de consecuencias que en poco tiempo se llevaría consigo a sus procreadores. El ambiente de crispación política reinante durante el trienio 1945-1948, azuzado por el sectarismo, la resistencia de sectores internos como la Iglesia católica, comerciantes e industriales al nuevo estado de cosas, hacían prever una ruptura inminente.

Fue tal el malestar causado por los juicios de responsabilidad civil y administrativa que la Asamblea Nacional Constituyente, electa en 1946, se vio en la obligación de revisar los procedimientos adoptados en procurar de apaciguar los ánimos caldeados.

Sin embargo, dada la mayoría absoluta de los diputados del partido Acción Democrática que a su vez detentaba el gobierno, pocos fueron los cambios efectuados. Las figuras más emblemáticas del *Ancien régime* finalmente perdieron sus bienes y luego fueron enviados al exilio. Los partidos minoritarios de oposición aprovecharon para endilgar al gobierno, la sed de venganza de sus integrantes que otrora habían sido objeto de persecución.

Las pocas absoluciones emanadas del Jurado, en nada contribuyeron a mitigar las críticas. La proximidad de los comicios para la elección del presidente de la República y demás cuerpos deliberantes, en diciembre de 1947, no hizo más que atizar los enfrentamientos entre los partidos políticos, sobre todo ante el temor de una posible instauración de un régimen de partido único por parte de Acción Democrática, tal como había ocurrido en México y en España. Tales reyertas, en ocasiones arrojaron saldos de víctimas fatales en varias partes del país.

El caso de Román Cárdenas fue quizá el más emblemático, por tratarse de alguien completamente retirado de la vida pública, además de gozar del respeto por una obra perdurable. La presunción de culpabilidad ventilada públicamente, abrió profundas heridas difíciles de sanar y sirvió de excusa para demonizar a los personeros del gobierno octubrista.

No sería casual que tras el derrocamiento del gobierno de Acción Democrática en 1948, los jefes militares triunfantes, ordenarían la restitución de los bienes de algunas de las personalidades afectadas con miras a transmitir la idea de estar subsanando los atropellos de una revolución mal vista por sectores conservadores de la sociedad.

## Bibliografía

- BETANCOURT, Rómulo (1986): *Venezuela, política y petróleo*. Caracas: Monte Ávila.
- CABALLERO, Manuel (2004): *Rómulo Betancourt, político de nación*. Caracas: Fondo de Cultura Económica/Alfadil.

- CALDERA, Rafael (1989): "Debate en torno al informe de la comisión designada para estudiar el proyecto de decreto en relación con las actuaciones de las comisiones calificadoras, sustanciadora y del jurado de responsabilidad civil y administrativa". En: *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Asamblea Nacional Constituyente 1946-1947*. Caracas: Congreso de la República, volumen 62.
- CARRERA DAMAS, Germán (2013): *Rómulo histórico*. Caracas: ALFA.
- El Plan de Barranquilla 1931* (2007): "Estudio preliminar de Manuel Caballero". Caracas: Fundación Rómulo Betancourt.
- El Universal* (1947): "Saber rectificar es saber gobernar". En: *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948*. Caracas: Congreso de la República, volumen 66.
- FERNÁNDEZ, Pablo Emilio (1956): *Gómez el rehabilitador*. Madrid: Jaime Villegas.
- Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela*, Caracas 20.8.1946, N° 185, Extraordinario, Año LXXIV, Mes XI.
- HERRERA MENDOZA, Jesús María (1964): *Reminiscencias*, t. I. 2a ed. Caracas: s.e.
- LINARES DE MONTEMAYOR, Carlos (1942): *Román Cárdenas y la reforma de la hacienda venezolana*. Caracas: Editorial Actualidad.
- OCHOA, Orlando (2008): "La institución fiscal y el rentismo en el desempeño económico de Venezuela". En: *Revista Nueva Economía* 28, pp. 153-205.
- OLIVAR, José Alberto (2009): *Román Cárdenas*. Caracas: El Nacional/Fundación Bancaribe.
- PARRA MÁRQUEZ, Héctor (1989): "Temas del día. La concordia y los juicios por peculado". En: *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948*. Caracas: Congreso de la República, volumen 66.
- PEPPER, José Vicente (1939): *Hombres*. Caracas: Editorial Bolívar.
- PICÓN SALAS, Mariano (2007): *Suma de Venezuela*. Caracas: Fondo editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- PINZÓN, Rafael (1989): "Carta abierta al comandante Julio César Vargas, 5 de abril de 1947". En: *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Gobierno y época de la Junta Revolucionaria. Opinión política a través de la prensa 1945-1948*. Caracas: Congreso de la República, volumen 66.
- POCATERRA, José Rafael (1979): *Memorias de un venezolano de la decadencia*, 2 tomos. Caracas: Monte Avila.
- QUINTERO, Inés (1985): "De la alucinación a la eficiencia (Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda)". En: *Revista Tierra Firme*, 12, pp. 599-611.
- USLAR PIETRI, Arturo (1992): *Golpe y estado en Venezuela*. Caracas: Grupo editorial Norma.
- SEGNINI, Yolanda (1982): *La consolidación del régimen de Juan Vicente Gómez*. Caracas: Academia Nacional de la Historia.
- YARRINGTON, Doug (2003): "Cattle, Corruption, and Venezuelan State Formation during the Regime of Juan Vicente Gómez, 1908-35". En: *Latin American Research Review* 38, 2, pp. 9-33.